

## DECLARACIÓN PÚBLICA

### **Sudáfrica: Combate contra el clima de terror e impunidad en Richmond (KwaZulu Natal)**

Amnistía Internacional considera muy positivas las recientes iniciativas del gobierno que contribuyen a aportar cierta seguridad a las comunidades de Richmond, aterrorizadas por una ola de homicidios por motivos políticos, al parecer relacionados con el control sobre el territorio y los recursos del gobierno local. No obstante, la organización continúa preocupada, ya que las vidas de los residentes están aún en peligro, y lo estarán hasta que los responsables de decenas de homicidios que se vienen cometiendo desde mayo de 1997 sean arrestados y puestos a disposición judicial.

La pauta y la factura de los homicidios, especialmente durante el mes de julio, indica claramente que hay un «escuadrón de la muerte» entrenado por el ejército operando en la zona. En el último ataque, perpetrado durante la noche de 28 de julio, nueve miembros de la familia Shezi, entre ellos cuatro niños pequeños, fueron abatidos por disparos efectuados a bocajarro por pistoleros armados con rifles de alta velocidad. Los Shezi murieron en su casa de Esimozomeni, a las afueras de Richmond, a pesar de las visitas efectuadas a la zona con gran despliegue de medios por altos funcionarios del gobierno nacional y de que tras las anteriores matanzas de julio se habían desplegado en la zona varios cientos de policías y soldados.

Hasta ahora, los homicidas han podido actuar con total impunidad. Los residentes de las comunidades de la zona de Richmond viven atemorizados. Muchos de ellos no confían en la policía local y dudan de su imparcialidad y su eficacia. Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación que nadie haya comparecido ante la justicia por ninguno de los asesinatos y otros homicidios motivados políticamente que se han perpetrado a decenas en el área de Richmond desde que el miembro del Consejo Local de Transición Rodney van der Bijl fue abatido a tiros en el exterior de su domicilio en mayo de 1997. Hay indicios de que las investigaciones de la policía se han realizado de forma muy deficiente y, según los informes, han desaparecido de los expedientes pruebas fundamentales necesarias para establecer la relación existente entre los incidentes. Los testigos están demasiado asustados para cooperar en un proceso en el que no confían.

Un representante de Amnistía Internacional que visitó Richmond se enteró de que en las horas siguientes a la matanza del 3 de julio de 1998, en la que murieron ocho personas, incluido el alcalde auxiliar, Percy Thompson, no hubo ningún despliegue policial para reforzar la seguridad en el domicilio del alcalde, Andrew Ragavaloo, cuya vida está constantemente amenazada, a pesar de que en ese mismo momento había más de una docena de vehículos policiales aparcados en la comisaría de policía. Ese 3 de julio unos pistoleros dispararon contra los parroquianos de una taberna situada no muy lejos de la comisaría. En el momento de la matanza, un vehículo Toyota, modelo *bakkie*, de color blanco y con una llamativa banda roja fue visto cerca de la taberna, y más tarde cerca de la casa del alcalde, por cuyos alrededores el vehículo daba vueltas, al parecer realizando tareas de vigilancia. También se notificó la presencia de este vehículo en el exterior de las casas de otras víctimas. El hecho de que la policía local no proporcionara de inmediato la seguridad necesaria a las personas amenazadas no ha hecho más que avivar la sospechas sobre sus intenciones.

Tras la matanza del 28 de julio en Esimozomeni, los residentes de esta comunidad rural han huido de sus domicilios. Junto con centenares de personas más de otras comunidades de Richmond, como

Ndalení y Magoda, duermen en los bosques cercanos o en salones de actos y clínicas, temerosos de ser atacados en sus hogares.

Las autoridades nacionales respondieron a la matanza de la taberna ordenando el despliegue en Richmond de efectivos de la Fuerza Sudafricana de Defensa Nacional y destacamentos de policía de otras zonas para organizar patrullas, controles de carretera y registros casa por casa en busca de armas. Sin embargo, la eficacia de esta iniciativa puede haberse visto mermada inicialmente por falta de coordinación y control general, así como por ciertas características de la zona, como la ausencia de alumbrado en las calles de las áreas afectadas. La profunda oscuridad que envuelve cada noche estos municipios empobrecidos, la ausencia de teléfonos, de calles en condiciones y de otras infraestructuras han facilitado las actividades de los homicidas, mermando la eficacia de las patrullas de las fuerzas de seguridad, incluidas las patrullas a pie, y dejando a los residentes de Magoda y Esimozomeni desprotegidos y asustados. El representante de Amnistía Internacional que visitó Richmond a comienzos de julio se enteró de que los intentos de instalar reflectores en las calles no habían progresado porque las autoridades provinciales no habían dado los fondos necesarios.

A finales de julio, tras nuevos homicidios tipo ejecución, las autoridades nacionales incrementaron el despliegue de efectivos de seguridad hasta llegar a unos ochocientos soldados y policías, entre ellos una compañía del ejército especializada en el desplazamiento por terrenos difíciles. El 29 de julio, tras la intervención del presidente Nelson Mandela, comenzaron a instalarse potentes reflectores en lo alto de mástiles de 40 metros en Ndalení y Magoda, pero no en Esimozomeni.

Ya ha dado comienzo una tarea fundamental: tratar de resolver la inacción de la policía y la fiscalía a la hora de pedir responsabilidades de sus actos a los autores de los homicidios, un problema que viene existiendo desde hace largo tiempo. El ministro de Seguridad F. S. Mufamadi y otros están tratando de crear un equipo de investigación verosímil, imparcial y eficaz, dirigido y compuesto principalmente por detectives de que no pertenezcan a la policía local. Amnistía Internacional no tiene noticias de que este equipo haya realizado aún ningún arresto significativo, pero, según los informes, se han emitido varias órdenes de arresto. También es fundamental que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los testigos.

Un organismo creado por ley al efecto, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, está investigando las denuncias de complicidad directa e indirecta de la policía en los homicidios. También se han incorporado peritos patólogos a la investigación de la matanza de la familia Shezi del 28 de julio. Es importante que exista una adecuada coordinación y cooperación entre todos estos organismos de investigación para conseguir que los perpetradores comparezcan ante la justicia.

Amnistía Internacional espera que estas iniciativas sirvan para comenzar a mitigar el clima de terror e impunidad que reina en la zona de Richmond. Es posible que las mejoras en la situación de seguridad de los residentes permitan después a los representantes de partidos políticos, incluido el Congreso Nacional Africano (CNA), el Movimiento Democrático Unido y el Partido de la Libertad Inkatha (PLI), reunirse y buscar la forma de incrementar las posibilidades de que se desarrolle una actividad política libre en los meses previos a las elecciones generales de 1999.